



Al servicio de la paz y la justicia

SALA CIVIL

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Proceso: Prueba anticipada

Solicitante: Lina María Restrepo Ospina

Solicitado: Gabriel Jaime Arango Rodríguez y otro

Radicado: 05001 31 03 019 2024 00095 01

Instancia: Segunda

Asunto: En la nueva regulación del CGP la prueba extraprocesal no solo tiene como propósito asegurar el medio o elemento de prueba, sino también poder preconstituir otras y allanar el camino para la viabilidad o no de un eventual litigio.

Decisión: Revoca auto

Providencia: No. 034 de 2024

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la parte solicitante en contra del auto proferido el siete (07) de marzo de 2024, por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Medellín, mediante el cual se rechazó la solicitud de decreto de prueba extraprocesal.

I ACTUACIÓN PROCESAL

1.1. Auto impugnado¹.

El juez negó la solicitud, argumentando que solo es procedente cuando el elemento de prueba es susceptible de cambio o alteración con el tiempo, lo que podría comprometer su valor probatorio. No obstante, en el caso no se demostró circunstancias que generen riesgo o urgencia que fundamenten su admisión. Para ello se apoyó en lo dicho la corte constitucional en la sentencia T-274/2012, así como otra providencia de la Corte Suprema que retoma lo dicho por aquella, e incluso otras emitidas por

¹ 01PrimeraInstancia/ Actuación N° 003AutoRechazaExtraproceso.

este mismo tribunal con similar postura. Por lo anterior, al no acreditarse una situación apremiante o un temor fundado de pérdida de la evidencia, no sería posible acceder a la solicitud de prueba anticipada. Además, en el análisis de los requisitos intrínsecos de los medios de prueba, no encontró superado el de la pertinencia.

1.2. El recurso².

Inconforme con tal decisión, la solicitante por medio de apoderado judicial interpuso recurso de apelación aduciendo que:

1. El legislador estableció los requisitos específicos para las pruebas anticipadas en los artículos 183 y 184 del CGP. Por lo tanto, cualquier imposición de requisitos adicionales por parte del poder judicial se percibe como una violación constitucional y una interferencia indebida en las políticas legislativas. Consideró tal decisión como arbitraria y caprichosa, que además implica una restricción injustificada al acceso a la justicia y a los derechos fundamentales.

2. Advierte que el juez se basó en una sentencia obsoleta, ya que: I) fue emitida bajo el Código de Procedimiento Civil, el cual requería una situación de urgencia para testimonios anticipados; II) la sentencia de tutela no abordó directamente los requisitos establecidos por el legislador para las pruebas anticipadas, sino que trató sobre el ingreso tardío de una prueba anticipada en un proceso en curso. III) Mientras que el Código de Procedimiento civil exigía urgencia para testimonios de terceros, el actual no impone tal requisito para las declaraciones de parte.

3. La conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba están respaldadas por los hechos establecidos en el escrito de la solicitud.

4. El Código General del Proceso (CGP) fue diseñado para promover los principios de acceso a la justicia, celeridad y eficiencia. Por ende, la utilidad de la prueba anticipada no solo sirve para asegurar la disponibilidad de la evidencia en el futuro, de ser así se estaría vaciando de contenido los artículos 427, 422 y 180 del CGP, y se restringiría la libertad probatoria.

² 01PrimerInstancia/ Actuación N° 004MemorialRecurso.

II PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde determinar, si en efecto, hay lugar a revocar la decisión impugnada con base en los argumentos del recurrente.

Para resolver lo propio, habrán de tenerse en cuenta las siguientes:

III CONSIDERACIONES

3.1 Competencia: Es competente la Sala, dado que de conformidad con el numeral 3° del artículo 321 del Código General del Proceso, la decisión reprochada es apelable, y la sala funge como superior funcional del Despacho que la profirió.

3.2. Las pruebas anticipadas o extraprocesales en el CGP

Es verdad que tradicionalmente, con el Código de Procedimiento Civil, se solía interpretar que las pruebas anticipadas o extraprocesales tenían como objeto *“la necesidad de asegurar una prueba que después, al adelantarse el proceso correspondiente y por el transcurso del tiempo y el cambio de los hechos y situaciones, no podría practicarse, o su práctica no arrojaría los mismos resultados”*³. Esta interpretación derivaba lógica del contenido literal del entonces artículo 298 del C.P.C, según el cual *“podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas”* (subrayado del despacho).

Sin embargo, con la entrada en vigencia del Código General del proceso, las pruebas anticipadas, y en específico el interrogatorio de parte que es lo que acá se revira, no solo tienen como única finalidad el de asegurar el medio probatorio que sigue siendo un propósito ínsito, connatural a esa institución jurídica, pues existiendo la etapa en el desarrollo del proceso, necesaria por demás, de la práctica de los interrogatorios exhaustivos a las partes en la audiencia inicial que prevé el artículo 372 de este Estatuto, es ese el escenario natural de su práctica, más allá de lo que

³ C-830/02, M.P. Jaime Araujo Rentería, 8 de octubre de 2002, donde se estableció la teología de las pruebas anticipadas.

cada parte pudo haber confesado en su demanda o en la réplica según el extremo en el que encuentre; por tanto, examinar tal exigencia no implica una *usurpación* de funciones legislativas, y mucho menos un desconocimiento de los postulados constitucionales, pues ha de saber el señor abogado que desde hace rato el juez dejó de ser la mera “voz que pronuncia la ley”, la sola idea repele y hiere la noción de Estado Social de Derecho al cual adscribimos como sociedad desde el año 1991. Esas nociones positivistas a ultranza desconocen que el fin del Estado ya no son las instituciones en sí mismas, sino el individuo y sus garantías (Art. 1 y 2 de la Constitución), por eso se erigió a norma de normas la misma Carta política (art. 4 lb.), para que los jueces entendamos que la aplicación de la norma, por más vigente que se encuentre, solo tiene sentido en tanto haya superado ese análisis superior, ese mismo del que paradójicamente se duele el recurrente. Claro está, y desde hace rato, que no siempre el legislador puede regular todos los acontecimientos y devenires sociales, y mucho menos puede avizorar todas las variables y particularidades que confluyen en las relaciones intersubjetivas. Es obvio que por más clara que aparezca alguna disposición, siempre es necesario su examen dentro de la integralidad propia del ordenamiento jurídico que empieza precisamente por esa norma Superior, tan es así que a ello acude el accionante, a la vigencia del mandato Constitucional.

Por eso precisamente resulta acertado ese otro entendimiento que se plantea en el recurso, pues al preguntarse por la razón de ser de la norma en cuestión, fluye evidente cómo una de las nuevas tendencias de las instituciones procesales, y en especial del citado C.G.P., es disminuir la litigiosidad, no solo potencializando los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sino también que a través de esta práctica de pruebas extraprocesales, no solo se allane el camino para el procesamiento de una pretensión menos litigiosa, como por ejemplo preconstituir un título ejecutivo o lograr la confesión anticipada de la parte que seguro recortaría luego del debate probatorio; pero y por sobre todo, y es en lo que realmente quiere hacer hincapié el Tribunal, puede ofrecer luces a la parte para decidir, en un juicio razonado y ponderado de lo que allí se obtenga, si finalmente encuentra mérito o no para adelantar el proceso que tenía proyectado.

A tono con tal entendimiento, bien lo advertía, como doctrinante, un colega actual de esta Corporación al señalar que: *"En el CGP, las pruebas extraprocesales cumplen un fin adicional, que es impedir a las partes frente a algunos medios, utilizar el proceso como un mecanismo de averiguación de los hechos, de allí que se afirme que el de este código es un proceso de corte confirmatorio y no averiguatorio, en la medida en que exige a las partes aportar la prueba de algunos hechos, sin que se permita, dados determinados supuestos, que sea el juez quien consiga determinada información"*⁴.

Por eso es que la actual codificación ya no incorpora expresamente esa condición que extraña y añora el señor Juez al momento de resolver como lo hizo citando algunos precedentes que en verdad se emitieron bajo la anterior regulación, o solo bajo los prósitos que en ese entonces se habían definido. El actual artículo 184 regula tal institución estipulando que: *"Quien pretenda demandar o tema que se le demande, podrá pedir, por una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del proceso. En la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el cuestionario, sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia"* (resaltado intencional).

Así las cosas, siendo válido afirmar, como lo plantea el recurrente, que hoy día, en principio, los requisitos para presentar la solicitud serían apenas: a) determinar el medio de prueba a decretar; B) la descripción de los hechos que justifiquen la solicitud; C) Lo que se pretende probar con la práctica de prueba extraprocesal y D) la identificación de la futura contraparte; de manera alguna fulmina la idea de auscultar por esos otros propósitos como lo hizo el Juez, es mas bien la parte misma quien, desde la formulación de su solicitud debería explicitar con claridad que no se trata de un aseguramiento del medio de prueba, razón genuina que le dio vida a esta institución, se insiste, sino simplemente de esos otros fines que acá se expusieron con posterioridad y solo para fundar el reproche.

⁴ Nisamblat, Nattan. (2023). "Derecho probatorio- Tecnologías de la información y la comunicación". Pruebas anticipadas y Extraprocesales. Ediciones doctrina y ley Ltda. Pag 542-543.

En fin, como fuere, en todo caso los dispensadores de justicia no podemos perder de vista que el derecho a la prueba es de naturaleza constitucional, lo cual realza sin ambages el legislador, no solo por lo expresamente señalado en el artículo 29 de la C.P., sino también por lo dicho en los artículos 11 y 14 del estatuto Procesal vigente, permitiendo por ejemplo que las decisiones sobre pruebas puedan ser siempre revisadas a través de un recurso como este, a pesar de lo excepcional.

Ahora en lo que tiene que ver con esos advertidos requisitos intrínsecos de los medios de prueba, o atributos que otros llaman, la Corte Suprema⁵ ha dicho que la:

- *Conducencia*, se satisface cuando el medio de convicción ostenta aptitud legal para forjar certeza en el juzgador, lo que presupone que esté autorizado en el procedimiento.
- *Pertinencia*, implica que guarda relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el juzgamiento.
- *Racionalidad*, cuando es realizable dentro de los parámetros de la razón y,
- *Utilidad*, si reporta algún beneficio, por oposición a lo superfluo o innecesario".

Por ello, cuando se rechaza de plano o se inadmite una prueba, la decisión debe estar respaldada por una ausencia clara y debidamente justificada de los requisitos mencionados anteriormente. De lo contrario, podría tener repercusiones significativas en el derecho de las partes a presentar pruebas y, por ende, en el debido proceso.

En el caso en cuestión, según el supuesto fáctico, es clara la pertinencia del medio invocado para lo pretendido, y ello solo bastaba, pues no se trata de exigencias concurrentes, sino de confluencia según el caso particular y el escenario donde se solicite practicar; aunque acá la utilidad también se daba por descartada en tanto, hasta ahora no se han practicado más pruebas para el mismo efecto; la conducencia no tiene incidencia por cuanto eso que se pretende establecer no está sometido a

⁵ CSJ-Sala de casación Penal. MP Luis Guillermo Salazar Otero. Radicación 43921, 13 de abril de 2016.

tarifa legal, ni el legislador ha previsto algún medio específico de prueba para el efecto, y por supuesto que nada de irrazonable fluye de él.

Consecuentemente, habrá de revocarse la decisión cuestionada, para en su defecto disponer la admisión de la prueba extraprocesal que, no obstante el Juez deberá decretar para que, de acuerdo con su agenda, pueda programar la diligencia del caso.

IV.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala de Decisión Civil Unitaria,**

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto objeto de impugnación, de fecha y naturaleza ya indicados conforme lo motivado, **y en su defecto por ser procedente el Juez la decretará y fijará la fecha respectiva conforme a la disponibilidad de su agenda de lo cual no puede disponer el Juez.**

SEGUNDO: En firme lo aquí resuelto, devuélvase el expediente digital al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA

Magistrado

Firmado Por:
Benjamin De Jesus Yepes Puerta
Magistrado

Sala Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b1365f1149d9863a79f0e16d76dc46dc8d35fea0e0b0463d8a76857e63e6c170**

Documento generado en 30/04/2024 04:26:09 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>